



29

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ
-SECCIÓN SEGUNDA-**

**EXPEDIENTE 2019-0009-00
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ VS FOMAG Y OTRO**

Bogotá, D.C., **28 ENE. 2019**

El despacho se abstendrá de avocar conocimiento en el presente medio de control por carecer de competencia para ello, de acuerdo a las siguientes

CONSIDERACIONES

Una vez verificadas las pretensiones de la demanda encuentra el despacho que las mismas se encuentran dirigidas a obtener la nulidad de la resolución N° 8793 de 31 de agosto de 2018, por medio de la cual se ajustó la pensión vitalicia de jubilación de la docente Rosa Emilce Ávila Fajardo.

De esta manera encuentra el despacho que la discusión entre dos o más entidades oficiales sobre la exclusión en el pago de la cuota parte pensional, se desprende que la obligación **indudablemente no es un conflicto laboral**, sino uno de naturaleza económica no laboral, como se entra a estudiar a continuación.

Las competencias de los Juzgados Administrativos para la ciudad de Bogotá, se encuentran distribuidas conforme al Acuerdo PSSA-3501 de julio de 2006 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que reglamentó el reparto de los asuntos de su conocimiento conforme a las siguientes reglas:

"Artículo Quinto: En los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, en desarrollo de los establecido por los artículos 1 y 2 del Decreto 1382 de 2000 artículo 3 de la Ley 393 de 1997 y los artículos 16 y 51 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989 y el artículo 2 del Acuerdo 3345 de 2006 el reparto se someterá a los siguientes lineamientos:

5.1. Para los asuntos que deben asignarse a cada uno de los grupos de juzgados, según la correspondencia que entre ellos existe con las Secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el reparto se hará en forma equitativa y al azar teniendo en cuenta el número que identifica cada despacho.

(...)"

Es así como las actuaciones y demandas que tramiten los Juzgados Administrativos de Bogotá, deben respetar la distribución asignada en la misma forma establecida para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de tal manera que a los despachos pertenecientes a la Sección Segunda, les corresponden los **de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral**, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989.

Sobre el tema en estudio, la jurisprudencia constitucional¹ ha dicho que los aportes patronales son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, que representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas.

Son obligaciones **de contenido crediticio** a favor de la entidad encargada del reconocer y pagar la pensión, que presentan, entre otras, las siguientes características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho pensional; y (iii) **se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago de la mesada al ex trabajador.**

A esto se agrega, que la obligación de contenido crediticio que surge para la entidad que concurre al pago de la mesada, una vez satisfecha permite mantener el marco de sostenibilidad fiscal para cumplir con la obligación de seguridad social de cubrir la prestación a futuro.

La Sección 4ª del Consejo de Estado² ha señalado, que como los aportes a la seguridad social constituyen **recursos parafiscales**, para su **cobro** debe **recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales.**

Así mismo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011), con ponencia del Dr. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS³, precisó:

¹ En la sentencia C- 895-09. M.P. Jorge Iván Palacio. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 parcial de la Ley 1066 de 2006.

² Radicado interno de julio 30 de 2004. M.P. Ligia López Díaz.

³ Radicación: 250002327000200800175-01, No Interno: 18123, Demandante: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, Demandado: MUNICIPIO DE GIRARDOT, Asunto: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

“la resolución de reconocimiento de la pensión es el acto administrativo en donde nace no sólo el derecho a la pensión, sino donde se consolidan las cuotas partes pensionales como obligaciones a cargo de las entidades responsables de las mismas, porque es en el procedimiento previsto para la expedición de esa resolución en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago. Y, tal como lo aclara la Corte, si bien las cuotas partes pensionales nacen cuando una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por ésta última a partir del momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas.

En esa medida, el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales está conformado por la resolución que reconoce el derecho a la pensión y la obligación correlativa de las entidades concurrentes.

El acto administrativo de liquidación de las cuotas partes pensionales causadas en virtud del desembolso efectivo de las respectivas mesadas pensionales no es un título ejecutivo en los términos del artículo 828 del Estatuto Tributario, aplicable al caso por disposición del artículo 5° de la Ley 1066 de 2006. Este acto funge, simplemente, como un certificado de la administración de los valores pendientes de pago por concepto de cuotas partes pensionales.

En el acto administrativo que reconoce la pensión es donde, en realidad, se puede apreciar el objeto de la obligación expresado en forma exacta y precisa, las partes vinculadas por la obligación, que también deben estar claramente determinadas e identificadas, la certidumbre respecto del plazo y, finalmente, la determinación de la cuantía o monto de la obligación o que ésta sea claramente deducible. En síntesis, es en este acto administrativo en donde se gesta la obligación clara y expresa.⁴

La exigibilidad, por su parte, derivada del acto administrativo que reconoce la pensión y la obligación correlativa de las entidades concurrentes, ocurre en el momento en que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas, y siempre y cuando la obligación no esté prescrita”.

Así se obtiene de todo lo anterior que la discusión reinante en este proceso no se origina entre una persona natural y un organismo del Estado por el pago de derechos laborales, cuyo conocimiento correspondería a la sección segunda de los Juzgados Administrativos, la discusión en este asunto se basa en la existencia de obligaciones pecuniarias entre entidades y, en esta materia, se ha concluido que el conocimiento es propio de la sección cuarta de los Juzgados Administrativos, conforme a la jurisprudencia reinante traída a colación y, al artículo 18 del Decreto 2288 de 1989, donde se señala:

“Artículo 18.- Atribuciones de las secciones. Las secciones tendrán las siguientes funciones;

SECCIÓN CUARTA. Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos:

1. De nulidad y restablecimiento del derecho relativos a impuestos, tasas y contribuciones.

2. De la jurisdicción coactiva, en los casos previstos en la ley.”
(...)” (Subrayado fuera de texto).

⁴ La doctrina de esta Corporación ha explicado que “- La obligación es expresa cuando surge manifiesta de la redacción misma del documento, en el cual debe aparecer el crédito - deuda en forma nítida, es decir, que la obligación esté declarada de forma expresa sin que haya lugar a acudir a elucubraciones o suposiciones; - La obligación es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido; y - La obligación es exigible cuando su cumplimiento no está sujeto a plazo o a condición, es decir, ante la existencia de plazo o condición, la obligación se torna exigible cuando el término para su cumplimiento ya venció o cuando la condición ya acaeció.” Ver sentencias de 27 de marzo de 2003. Exp: 22.900; del 10 de abril de 2003. Exp: 23.589; del 2 de octubre de 2003. Exp: 24.020 y de 17 de febrero de 2005. Exp: 25.860.

También frente al tema en comento, existe pronunciamiento de la Sección Segunda – Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente 25000-23-42-000-2014-01627-00, donde actuó como demandante el AREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA, contra CAJANAL EN LIQUIDACION, en donde se discutía quien era el competente para conocer una demanda de recobros pensionales, en este caso discutiéndose aportes parafiscales, considerándose en dicha oportunidad lo siguiente:

*“Para determinar el carácter o naturaleza de un litigio, se entenderá que tiene calidad de laboral, la controversia que se suscita entre un servidor público y la entidad con la cual labora, o se discute el reconocimiento, o la forma de liquidación de una prestación entre un empleado y el ente público a quien corresponde reconocerla, liquidarla y pagarla. También, cuando se discuten los actos emitidos por un organismo de control que imponen una sanción disciplinaria, por razón de las relaciones de sujeción y el deber funcional de quien demanda; igual, cuando se trata de determinar la existencia de una relación laboral o la legalidad de la desvinculación de un empleado. Es decir, **se requiere la existencia de una relación laboral**, y que una de las partes sea un particular y la otra una entidad pública, que el origen sea el vínculo laboral declarado o por declarar, o la seguridad social a que se tiene derecho, o por razón del poder disciplinario.*

Por el contrario, una discusión entre dos o más entidades sobre una obligación pecuniaria, independientemente de su origen, indudablemente no es un conflicto laboral, sino uno de naturaleza económica no laboral.

Al respecto, la Sala considera que no queda al capricho del operador jurídico determinar la competencia para conocer de la acción de que se trate, teniendo en cuenta que la norma quiso diferenciar los actos administrativos que resuelven asuntos relacionados con situaciones laborales, de todos los demás actos, asignando el conocimiento para resolver de los primeros a esta Sección⁵.

Se advierte que si bien es cierto, la resoluciones demandadas tienen su origen en los dineros que las entidades deben asumir para el pago de pensiones, ninguno de los beneficiarios de las prestaciones es parte en el presente proceso, y tampoco se está estudiando la legalidad de los actos que se refieren al derecho pensional de persona alguna, si no lo que se está sometiendo a la jurisdicción, es lo concerniente a la legalidad del cobro de una suma de dinero que una entidad reclama a otra, sin que importe la génesis de la obligación.

En conclusión, como se advierte que el presente litigio no se suscita entre una persona natural y un organismo del Estado, en busca del reconocimiento y pago de derechos pensionales o laborales, sino una discusión centrada en la existencia de obligaciones pecuniarias entre entidades estatales, la competencia no es de la Sección Segunda, sino de la Cuarta.

El artículo 18 del Decreto 2288 de 1989, señala:

“Artículo 18.- Atribuciones de las secciones. Las secciones tendrán las siguientes funciones;

SECCIÓN CUARTA. *Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos:*

1. De nulidad y restablecimiento del derecho relativos a impuestos, tasas y contribuciones.

⁵ Artículo 18.- Atribuciones de las secciones. Las secciones tendrán las siguientes funciones; **SECCIÓN SEGUNDA.** Le corresponde el conocimiento de los procesos de nulidad y de restablecimiento del derecho de carácter laboral, de competencia del tribunal.

Parágrafo. La Sección Segunda estará dividida en tres (3) Subsecciones denominadas A, B y C, cada una integrada por cuatro (4) Magistrados. Los casos de empate que resulten en las Subsecciones, serán dirimidos por la Sección Segunda en pleno.

La Sección en pleno también conocerá de los procesos que le remitan las Subsecciones, por su importancia jurídica o trascendencia social, si por estimar fundado el motivo resuelve asumir competencia.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

31.

2. De la jurisdicción coactiva, en los casos previstos en la ley.”

Por consiguiente, para la Sala es claro que la presente controversia no encuadra dentro de las competencias de la Sección Segunda, ya que en el presente caso no se debate ningún derecho de carácter laboral y los actos administrativos acusados no resuelven acerca de una controversia de este tipo, situación que es evidente teniendo en cuenta la condición de personas jurídicas que detentan las dos partes de la presente demanda. En efecto, es claro que en las relaciones laborales, una de las partes –el trabajador- siempre debe ser persona natural, razón por la cual se trata de una nulidad y restablecimiento del derecho de competencia de la Sección Cuarta

Tenemos entonces, que en el sub-lite nos encontramos frente a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que no proviene de una relación laboral, y que en consecuencia encuadra dentro de la competencia estipulada para la Sección Cuarta en el Art. 18 del Decreto 2288 de 1989, en razón de lo cual se deben enviar las diligencias a dicha sección.”

Por lo anterior, el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la falta de competencia por el factor funcional de este Juzgado para tramitar en primera instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el **DEPARTAMENTO DE BOYACA** contra la **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG - OTRO**, de acuerdo a lo motivado.

SEGUNDO. REMITIR por la secretaría de este Estrado las presentes diligencias a los **JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA – SECCION CUARTA (REPARTO)**.

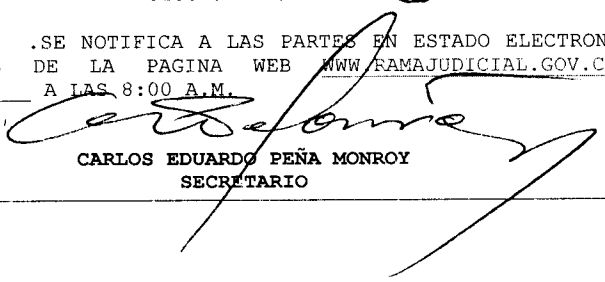
TERCERO. DEJAR las constancias y registros a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA

JUEZ

CEPM

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. -SECCION SEGUNDA-	
3	
EL AUTO ANTERIOR	.SE NOTIFICA A LAS PARTES EN ESTADO ELECTRONICO No.
A TRAVES DE LA PAGINA WEB	WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY
29 ENE 2018	A LAS 8:00 A.M.
	
CARLOS EDUARDO PEÑA MONROY SECRETARIO	

